

Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

Se complementa acta de audiencia de juicio de fecha 10 de abril de 2023, incorporándose con esta fecha el texto íntegro de la sentencia dictada.

RIT I-100-2023

RUC 23- 4-0461772-9

m.e.a.p.

### **TRANSCRIPCIÓN SENTENCIA**

Santiago, a diez de abril de dos mil veintitrés.

#### **VISTOS Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, comparece ante este Tribunal, **DEUDAS SPA**, rol único tributario N°76.278.529-3, representada en autos por el abogado don Patricio González Conejeros, ambos con domicilio para estos efectos en Huérfanos N°835, comuna de Santiago, Región Metropolitana, quien deduce reclamo de multa y, también, de resolución administrativa dictada por la **Inspección del Trabajo Provincial de Santiago**.

Funda su acción, señalando que viene a ejercer reclamo en los términos del artículos 503 y 504 del Código del Trabajo en contra, en primer lugar, de un certificado expedido por la Dirección del Trabajo. Dicho certificado, denominado “Certificado N°10” de fecha 18 de enero de 2022 tiene el siguiente contenido, se pasa a reproducir textual lo que dice el certificado N°10: *“El inspector provincial del trabajo de Santiago Certifica: Que consta en esta Inspección Provincial del Trabajo de Santiago depósitos de copias de proyecto de contrato colectivo, presentado por el SINDICATO N°1 de la EMPRESA DEUDAS.CL,*

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago – Merced 360  
Fono 226755600/ Mail: [jlabsantiago2@pjud.cl](mailto:jlabsantiago2@pjud.cl)



*R.S.U.13.01.5206, como data de recepción por parte del empleador DEUDAS.CL SPA RUT N°76.278.279-3 del día 12 de diciembre de 2022. Que, con fecha 05 de Enero del 2023 la comisión negociadora de la organización denominada SINDICATO N°1 DE LA EMPRESA DEUDAS.CL, R.S.U. 13.01.5206, solicitó a esta dependencia certifique si se ha producido la situación prevista en el Artículo 337 inciso 2° del Código del Trabajo, al no haber dado el empleador respuesta al proyecto de contrato colectivo que se le prestara y no haber acordado la prórroga contemplada en el artículo 335 inciso 1 del Código del Trabajo. Que, con fecha 09 de enero de 2023 se dio traslado al empleador para que realizara sus descargos. Que, revisado con fecha 17 de enero del 2023 nuestros sistemas informáticos y antecedentes que obran en esta Inspección Provincial del Trabajo se ha constatado que la empresa denominada DEUDAS.CL SPA RUT N°76.278.279-3 no responde el traslado otorgado con fecha 9 de enero de 2022. Que el plazo contemplado en el inciso primero del artículo 335 del Código del Trabajo venció el 22 de diciembre de 2022 y, que, el plazo consignado en el artículo 337 del Código del Trabajo venció el día 3 de enero del 2023, por aplicación del artículo 312 del Código del Trabajo. Que, en consecuencia, se ha producido el efecto previsto en el inciso segundo del artículo 337 del Código del Trabajo, esto es, que el empleador ha aceptado el proyecto presentado por el SINDICATO N°1 DE EMPRESA DEUDAS.CL, R.S.U. 13.01.5206”, ese sería el contenido, entonces, del certificado que se impugna.*

La solicitud de la reclamante, entonces, se funda esencialmente en que los fundamentos fácticos y jurídicos que se tuvieron en consideración para dictar esta resolución administrativa, como señala la parte reclamante, no son correctos. El motivo de esta aseveración, según lo que se contiene en el escrito de demanda, sería que el empleador no dio respuesta al traslado conferido por la Inspección del Trabajo respecto del proyecto de contrato colectivo, en razón de que el sindicato

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago – Merced 360  
Fono 226755600/ Mail: [jlabsantiago2@pjud.cl](mailto:jlabsantiago2@pjud.cl)



no podía iniciar negociación colectiva, al encontrarse pendiente la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 360 del Código del Trabajo.

Con ello, en definitiva, sostiene que la reclamada incurrió en irregularidades e ilegalidades en el certificado N°10, consistentes, primero, en la falta de notificación del certificado, segundo, una errada creencia de que el proceso de calificación de servicios mínimos estaba finalizado y, tercero, el hecho de haberle dado efecto retroactivo al proyecto de contrato colectivo, y aplicar erradamente los artículos 335 y 337 del Código del Trabajo.

**SEGUNDO:** Que, la reclamada presentó contestación la que fue declarada extemporánea. Producto de lo anterior se aplicará lo dispuesto en el artículo 453 N°1 inciso 7° del Código del Trabajo, teniéndose como tácitamente admitidos los hechos señalados en el reclamo.

**TERCERO:** Que, el primer asunto a analizar es respecto a la naturaleza del acto administrativo recurrido. Al efecto, de la simple apreciación de los certificados, o más bien, del certificado N°10 que se impugna, es posible concluir que este certificado no es una resolución, sino que se trata de una actuación de un Ministro de Fe, que certifica que revisados antecedentes y sistemas informáticos de la Dirección del Trabajo, no se verifican respuestas del empleador a los requerimientos detallados en los plazos establecidos en la ley y conforme a los traslados conferidos. Es decir, el certificado no tiene los efectos jurídicos que pretende atribuir la reclamante, pues se trata solo de la constatación de hechos, y no importa la interpretación de las normas jurídicas a la que la actora hace referencia. De hecho, el certificado no hace mención alguna a un procedimiento de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia y solo se limita a señalar la constatación de los hechos ya indicados, y el transcurso de los plazos



señalados. Cabe hacer presente que la sanción del artículo 337 inciso segundo del Código del trabajo no requiere de una resolución de la Dirección del Trabajo ni de una actuación en tal sentido, sino que es un efecto producido por el solo ministerio de la Ley, ante la falta de respuesta del empleador en los plazos establecidos.

Luego, la circunstancia de que el acto recurrido no sea una resolución que aplique una multa, implica que no correspondía fundar la acción deducida en la disposición normativa del artículo 503 del Código del Trabajo, pues dicha norma se refiere de forma exclusiva esta hipótesis, es decir, a los reclamos deducidos en contra de las resoluciones que imponen una multa en los términos señalados en el artículo 503 del Código del Trabajo. La segunda norma a la que se hace alusión la parte reclamante para fundar su acción es la del artículo 504 del Código del Trabajo, esta norma señala lo siguiente, aquí nuevamente se leerá textual la norma, “artículo 504: En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal, se establezca reclamación judicial en contra de resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio, contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código”. Como se puede ver esto se trata de una norma residual en que se otorga, o más bien, se define cual es la forma en que se conocerá determinada acción que no sea la acción de reclamación de multa del artículo 503 ni la de la reclamación de la reconsideración administrativa, artículos 511 y 512 del Código del Trabajo.

En el caso en análisis, el acto impugnado no es una resolución pronunciada por la Dirección del Trabajo, sino que como se ha señalado es una actuación, una simple constatación hechos y, en particular, de los hechos que serían que no



consta en las respuestas de correo electrónico en los sistemas informáticos de la reclamada. Esta actuación no contempla ningún recurso formalmente establecido en la Ley. Al efecto, no hay ninguna norma que otorgue alguna acción de impugnación judicial ante los Juzgados de Letras del Trabajo respecto de una actuación o certificado que haga aplicable la norma residual del artículo 504 del Código del Trabajo, pues no existe norma que otorgue la acción a la que hace referencia la disposición señalada. Recordemos, que el artículo 504, como ya fue leído, señala la forma en que se sustanciará los procedimientos respecto a aquellos en que se establezca una reclamación judicial en contra de las resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, ya sea, por el Código del Trabajo o por otro cuerpo legal, cuestión que en la especie no concurre.

Lo anterior resultaba lógico, considerando que la actuación reclamada se limitó a constatar hechos y dar cuenta del cumplimiento de plazos o, en este caso, de incumplimiento de plazos. No hay un pronunciamiento que afecte a la reclamante que sea susceptible de ser enmendado, y no hay perjuicio en la actuación, por cuanto su anulación no significa que los hechos constatados en ella desaparezcan. El empleador ya no dio respuesta en el plazo establecido, y la desaparición del certificado N°10 no le otorgará un plazo adicional, pues este plazo se encuentra establecido en la Ley.

Con ello, la acción deducida respecto del certificado N°10 resulta ser inadmisibles, por cuanto no se dirige en contra de una resolución dictada por la Dirección del Trabajo, a la que se le otorgue una acción de impugnación ni en el Código del Trabajo ni en otra norma legal.

Adicionalmente, y aun cuando fuere procedente el análisis de la impugnación deducida, la propia reclamante ha reconocido la efectividad de los hechos constatados por la reclamada en el certificado N°10, ya que, señala

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago – Merced 360  
Fono 226755600/ Mail: [jlabsantiago2@pjud.cl](mailto:jlabsantiago2@pjud.cl)



expresamente en su escrito en primer lugar, aquí nuevamente se cita textual: El Sindicato N°1, sin contestar el requerimiento de “Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia”, con fecha 12 de diciembre de 2022, presentó una propuesta de contrato colectivo”, posteriormente y más adelante señala, nuevamente se cita textual “el Sindicato N°1 entendió, por la mala información y asesoría que se le entregó en la Inspección Provincial del Trabajo, que supuestamente el proyecto de contrato colectivo de fecha 12 de diciembre de 2022, habría quedado firme por no haber sido respondido por mi representada”.

Es decir, la reclamante reconoce que recibió el proyecto de contrato colectivo el 12 de diciembre de 2022 y que no le dio respuesta. Justifica su actuar en que el sindicato no podía iniciar el proceso de negociación colectiva sin que se cerrara formalmente el proceso de calificación de servicios mínimos en los términos que señala en su reclamo. Sin embargo, más allá de la justificación, no niega que el contenido del certificado es cierto, no se dio respuesta por parte del empleador al proyecto. Por ello, aun cuando la acción fuere procedente y, eventualmente acogida, el efecto sería anular un certificado, mas no eliminar los hechos que allí aparecen, que podrían ser certificados nuevamente, al constatar en los sistemas de la Dirección del Trabajo las circunstancias que allí se señalan.

**CUARTO:** Que, posterior a la acción deducida y como se señaló en la audiencia preparatoria al inicio, la reclamante ingresó un escrito ampliando el reclamo, el que fue proveído conjuntamente con la reclamación principal, pese a que claramente se trataba de acciones diversas.

En este segundo caso, la acción se dirigió en contra de la resolución de multa N°4253/23/13 de fecha 17 de febrero de 2023, que impuso una sanción por no entregar la información requerida para efectuar las labores de fiscalización.



Señala que la fiscalizadora Claudia San Martín inició un segundo proceso de fiscalización solicitando documentación el día 15 de febrero de 2023, y ante esta solicitud la reclamante reconoce no haber enviado la documentación, contestando un correo electrónico con fecha 16 de febrero de 2023, indicándole que no podía seguir adelante con las fiscalizaciones hasta que existiera sentencia ejecutoriada que fallare el reclamo en contra del certificado N°10. Solicita en este caso, la parte reclamante, dejar sin efecto la resolución de multa impugnada, en atención a que debía resolverse previamente el reclamo respecto del certificado N°10, analizado de forma precedente.

Del tenor del reclamo respecto de esta resolución de multa, es evidente su improcedencia. Si bien, en este caso el reclamo si se enmarca dentro de las posibilidades que otorga el artículo 503 del Código del Trabajo, en relación con la naturaleza de la resolución impugnada, que en este caso se trata de una resolución que impone una multa, no existe presupuesto alguno que sostenga la impugnación. Al efecto, la reclamante no expone la existencia de errores de hecho, de falsedad de los hechos detectados por la fiscalizadora o, alguna situación similar. Por el contrario, reconoce la circunstancia de no haber entregado la información requerida, dando como respuesta a la solicitud un correo electrónico ejerciendo una interpretación a las normas sobre competencia, basándose en ello para simplemente no entregar lo solicitado, entorpeciendo la labor de fiscalización, tal como se señala en la resolución de multa impugnada.

Adicionalmente, la norma aludida como fundante de las excusas de la reclamante es la señalada en el artículo 5 letra B del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 que fija las competencias y las funciones de la Dirección del Trabajo, en este sentido, aquí se cita textual la norma que señala el reclamante en el correo electrónico al que hace alusión para efectos de no contestar el requerimiento de



solicitud de información y documentación y es, artículo 5° letra B: Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación social, sin perjuicio de la competencia que sobre determinadas materias tengan otros Servicios u Organismos Fiscales, salvo que el caso esté sometido al pronunciamiento de los Tribunales y esta circunstancia esté en su conocimiento. Esta norma, que fue citada por la parte reclamante ni siquiera se acerca al asunto analizado. Lo que ocurría en la especie es que había una impugnación sobre una actuación, no sobre una resolución y no una controversia sobre un caso relativo a la interpretación de la legislación laboral y la reglamentación social. Para ser más claros, la hipótesis que regula este artículo es aquel caso en que, en virtud de un dictamen general o una interpretación de la legislación laboral o reglamentación social donde se efectúen estas labores por parte de la Dirección del Trabajo y se efectúen labores de fiscalización sobre la misma, exista cierta controversia judicial, por ejemplo, si el Director del Trabajo hubiera establecido cierta interpretación sobre la norma del artículo del artículo 360 del Código del Trabajo, y la reclamante hubiera impugnado dicho dictamen y se efectuara una labor de fiscalización referida a la misma materia aplicando el dictamen impugnado, claramente la Dirección del Trabajo debía abstenerse por estar la interpretación sometida a la decisión de los Tribunales, de resolver o de fiscalizar sobre el asunto debatido. En la especie, lo que ocurre no tiene ninguna relación con la norma aludida, pues, como ya se señaló la hipótesis es completamente diversa.

Por ello, el reclamo no tiene fundamento plausible, y contiene además la admisión del hecho infraccional, esto es, la falta de entrega de la documentación requerida para la labor de fiscalización. Debido a lo expuesto, entonces, y atendido el reconocimiento de la parte reclamante, este reclamo también será rechazado.





**QUINTO:** Que, habiendo sido completamente vencida la parte reclamante y considerando, además, que a juicio del Tribunal no tenía motivo plausible para litigar se le condenará en costas, regulándose estas en la suma de \$300.000.-

Por tanto, en virtud de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 337, 420, 453 y siguientes, 503, 504 del Código del Trabajo, artículo 5 y 23 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1967 y demás normas legales pertinentes, **se declara:**

- I. Que, se rechaza el reclamo en todas sus partes.
- II. Que, se condena en costas a la reclamante regulándose éstas en la suma de \$300.000.-

Regístrese y archívese en su oportunidad, si es que no fuera objeto de recursos.

Téngase a las partes por notificadas de las resoluciones precedentemente dictadas.

**Sentencia dictada por don Guillermo Rodríguez Órdenes, Juez Suplente del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.**



